

**LA CONTRIBUCIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
EN MÉXICO O EL MISIONERO,
EL ARQUITECTO Y ROBIN HOOD**

M. SAÚL VARGAS PAREDES

Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Ciencia Política y Sociología

Documentos de Trabajo
POLÍTICA Y GESTIÓN

EDITA

Universidad Carlos III de Madrid
Instituto "Fermín Caballero" de Política y Gestión
Departamento de Ciencia Política y Sociología
Área de Ciencia Política y de la Administración

CONSEJO EDITORIAL

José Ignacio Cases Méndez
Ester García Sánchez
Manuel Hidalgo Trenado
Eduardo López-Aranguren Quiñones
Antonio Natera Peral
Javier Redondo Rodelas
Constanza Tobío Soler
Francisco J. Vanaclocha Bellver
Verónica Viñas Chiappini
Isabel Wences Simón

Documentos de Trabajo Política y Gestión en internet:
<http://e-archivo.uc3m.es/dspace/handle/10016/587>

Distribución gratuita, salvo ediciones especiales.

Universidad Carlos III de Madrid
Departamento de Ciencia Política y Sociología
Campus de Getafe
Calle Madrid, nº 126
28903 MADRID
Tfno.: 916245821 – Fax: 916249574
Correo electrónico: politicaygestion@uc3m.es

Depósito Legal: M-8042-2008
ISSN:1698-482X

Diseño: Roberto Losada Maestre

Imprime:
Copy Red S.A.
Avda. de Fuenlabrada, 97
28912 Leganés (Madrid)

DOCUMENTOS DE TRABAJO "POLÍTICA Y GESTIÓN"

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

INSTITUTO "FERMÍN CABALLERO" DE POLÍTICA Y GOBERNANZA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

ÁREA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN

Documento de Trabajo n° 9/2007

**LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN
MÉXICO O EL MISIONERO,
EL ARQUITECTO Y ROBIN HOOD**

M. SAÚL VARGAS PAREDES*

Abstract: This document has two objectives: first, to evaluate the political parties' contribution to Mexican democracy, second, to evaluate the actual situation of Mexican political transition. We intend to focus our analysis in the three most important political parties in the country: Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), and Partido de la Revolución Democrática (PRD). The role of political parties in the building of Mexican democracy has been dissimilar. The PAN contributed to disseminate and to build institutions and democratic values; the PRI enhanced political stability and institutionality —two essential elements in democracy's life—, and the PRD embodied social policies in Mexican democratic agenda. The methodology employed is more theoretical than historical because the conceptual component that impels the analysis is democratic theory. We'll analyze only the last 25 years because Mexico has experimented the most important political changes in that period.

* M. Saúl Vargas Paredes es profesor de la Universidad de Quintana Roo en México.

ÍNDICE

Introducción	3
El misionero: predicador de la democracia	4
De los valores a las instituciones democráticas	8
Los retos del PAN	10
El arquitecto: el diseñador de institucionalidad	11
Los retos del PRI	15
Robin Hood: La lucha por los pobres	17
Los retos de las izquierdas	21
La transición	25
Conclusiones	28
BIBLIOGRAFÍA	33

Introducción

Este documento tiene dos objetivos principales: evaluar a) la contribución de los partidos políticos a la democracia en México, y b) el estado actual de la transición política del país. Para hacer esto, el trabajo centra su análisis en los tres partidos políticos principales en México, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) (mencionados por orden de antigüedad). Estos partidos son histórica y electoralmente los de mayor relevancia en México (*v.g.* concentran más de 90% de las preferencias electorales). En el caso del tercero se alude a la fuerza política de izquierda más que al partido mismo, pues su reciente creación (como PRD) no permite entender la riqueza de su pensamiento político y sus múltiples cambios de perspectivas e incluso de ideologías a lo largo del siglo pasado.

La hipótesis del trabajo es que el papel de los partidos políticos en la construcción de la democracia mexicana ha sido diverso. El PAN ha contribuido en la diseminación y construcción de instituciones y valores democráticos, el PRI en el diseño de institucionalidad y estabilidad política —elementos fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia— y el PRD en la inclusión de las políticas sociales en la agenda democrática de México.

Es importante señalar que hablo, en el caso del PAN, de las instituciones democráticas como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Registro Nacional de Electores (RNE) o el Tribunal Federal Electoral (TFE), la importancia del voto y su rol como oposición leal más que de las instituciones gubernamentales en su aspecto organizacional. Hablo de institucionalidad, en el caso del PRI, más que de instituciones, pues me refiero al conjunto de reglas (administradas por el poder civil y no militar) que los priistas generaron (y recrearon) a lo largo de 71 años y no sólo a las organizaciones públicas en concreto. El PRD ha sido un partido que, sin tener una profunda tradición democrática liberal, ha sido (con nombres diferentes) una fuerza política que ha defendido las causas de los grupos de menor ingreso de la sociedad mexicana, aspecto esencial para que una democracia sea sustentable en el largo plazo.

Sin embargo, la tradición católica del PAN le ha restado capacidad para entender una de las pocas características democráticas fundacionales del Estado mexicano, que es el laicismo (el triunfo de los liberales en el siglo XIX generó el claro predominio del Estado sobre la iglesia, reflejado en la expropiación de sus

bienes, situación que prevalece hasta el día de hoy). La principal tarea pendiente del PRI es su incapacidad para modernizarse, pues su origen político (creado para ejercer el poder sin competir por él) lo hace demasiado vertical y autoritario. Esto le ha impedido llevar a cabo su democracia interna. Finalmente, al PRD le falta profundizar su institucionalidad y su cultura del respeto por la ley. Su larga tradición de lucha social y de movilización popular ha opacado su cultura del voto, de tolerancia y de respeto por las reglas democráticas.

El método de este trabajo es teórico más que histórico. Esto se debe a que la teoría democrática es el componente conceptual que lo conduce. Los hechos históricos se usan para probar, ejemplificar o comparar ideas más que para describir procesos o cronologías. Se analizan sólo los últimos 25 años, ya que es el periodo en el que México ha tenido los cambios políticos más importantes (erosión y colapso del régimen revolucionario, avances democráticos en las regiones, reformas de Estado y de gobierno, cambios estructurales económicos y demográficos). Con más precisión, Peschard (2006: 31) señala que “en los últimos 15 años, la vida política mexicana ha cambiado más que en los 50 años anteriores”.

Hay cinco secciones. La primera analiza las aportaciones y retos del PAN en relación con la democracia mexicana, aludiendo sus características políticas y organizacionales. El segundo y tercer apartados examinan las mismas variables del PRI y PRD, respectivamente. La cuarta sección analiza la transición política de México. Las conclusiones se encuentran en el último apartado.

El misionero: predicador de la democracia

La principal contribución del PAN, que hoy se traduce en una victoria cultural en la política mexicana, es su creencia y diseminación de los valores e instituciones democráticas, en la apuesta por el voto como factor de cambio para el país y en asumir el rol de oposición leal. Todo esto le permitió contribuir al escenario de transición pacífica, acelerado en los últimos dos decenios del siglo XX, en el que evolucionó de partido de protesta a organización co-gobernante y finalmente a partido en el ejercicio del poder. No es sorprendente que para Nacif (en Reyes, 2006), “el principal aporte del PAN (sea) la democracia (y) haber contribuido a la transición y a las instituciones”, mientras que Aguayo (en Reyes, 2006) señale que la aportación panista “ha sido la obsesiva reivindicación del voto

como instrumento del cambio; en ese sentido se anticipó a los tiempos de transición democrática y contribuyó a la modificación de la cultura política de todo el país”. Krauze (2005: 1-10), por su parte, subraya que la aportación del PAN a la democracia mexicana ha sido una destacada “formación de ciudadanos, una labor legislativa siempre adelantada a su tiempo y una tenacidad admirable, heroica a veces, para resistir y sobrevivir a los atropellos de la maquinaria priista”.

Esta ruta de participación política que siguió el PAN no tuvo, sin embargo, consenso durante mucho tiempo (por lo menos hasta el decenio de los 70 cuando sufre una crisis profunda debido a la definición de su futuro). En este lapso, el componente católico del PAN, nutrido de las ideas de Efraín González Luna (EGL), representó el cimiento que sostuvo al PAN en momentos muy adversos, pues los católicos podían movilizarse ante el autoritarismo revolucionario (contrario a otros grupos laicos, ya sea por su condición corporativizada, clientelar o de debilidad estructural). Esta característica tradicional se oponía al laicismo e intelectualismo de Manuel Gómez Morín (MGM), más partidario de formar *minorías excelentes* (Loaeza, 1999) o grupo de notables, que impulsarían la modernización del país y que al mismo tiempo representaría la voz y cuerpo de los grupos no incluidos por el cardenismo, a través de la participación política y democrática.

El componente católico del PAN le generó la imagen de partido confesional, ensombreciendo su propuesta modernizadora, tanto política como económica. Mientras los doctrinarios (encabezados por EGL) proponían que el PAN tuviera un papel testimonial en la política, aislándose de la participación política y concentrándose en el perfil programático del Partido, los pragmáticos (encabezados por MGM) pugnaban por insertarse en la lucha electoral concreta con el fin de terminar con un régimen político con el que estaban en desacuerdo. Este dilema estuvo en la génesis del PAN en 1939. Esto reflejó el doble liderazgo panista (EGL vs. MGM) y también marcó un debate entre dos facciones que se encuentran presentes hasta ahora en ese partido: los participacionistas y abstencionistas, doctrinarios y pragmáticos, panistas tradicionales y neopanistas. Aunque la doctrina católica matizó profundamente el contenido ideológico del PAN, los participacionistas tuvieron en la práctica un papel protagónico a la hora de insertarse en la vida política mexicana. Para Gómez Morín, no había dudas: si él había contribuido a fundar un partido político, éste debía ser impulsado por la participación (la doctrina de la acción). Así, en la práctica, se

formó quizás involuntariamente la estrategia con la que el PAN iniciaría su largo camino a Los Pinos. Por un lado, la doctrina de acción le daría al PAN la oportunidad de cambiar un régimen autoritario. Por otro, la estrategia sería gradual, como apuntaba EGL, alérgico al poder mundano.

“En 66 años de vida, el PAN ha transitado por varias encarnaciones, todas referidas al domicilio histórico presidencial de “Los Pinos”: frente a Los Pinos (1939-1988), con Los Pinos (1988-1994), hacia Los Pinos (1994-2000), en Los Pinos (2000-2012)” (Krauze, 2005: 3). En este largo camino, el PAN basó su éxito en ser partido de oposición leal y de protesta. El primer factor lo comprometió ineludiblemente con la vía electoral y el pluripartidismo, y se insertó en el proyecto de largo plazo de la democracia mexicana. Por un lado, esto le otorgó un papel legitimador del régimen de la revolución, a través de su función como un competidor electoral. Este rol, aunque limitado en el corto plazo, le generó muchos beneficios en el tiempo, pues lo convirtió en un eficiente instrumento electoral, a tal grado que llegó a Los Pinos por la vía de las urnas. Por otro, en la medida que sexenio tras sexenio los gobiernos revolucionarios aplazaban el objetivo de la democracia plena (ligada inexorablemente con el desarrollo económico y el bienestar social en la visión priísta), los panistas prolongaban sus plazos también para el mismo propósito, pero gradualmente iban ganando espacios y generando condiciones de mayor competencia política (sobre todo desde el decenio de los 80).

El segundo factor (partido de protesta) potenció al PAN como un partido que podía amalgamar las diferentes voces disidentes en el país, que se traducían en monopolizar los votos de esos grupos, al margen de sus postulados y filosofía política. “El fundamento de su eficacia como tal era su imagen de oposición independiente fundada en el mismo aislamiento en el que vivió la mayor parte de su historia, el cual preservó su credibilidad” (Loeza, 1999: 30). En otras palabras, la participación impulsada por MGM, matizada por el aislamiento propiciado por EGL contribuyó a la capacidad del PAN como partido “cacha votos”, ganando gradualmente posiciones, sin perder credibilidad y sin desgastarse electoralmente (y hasta cierto punto políticamente). El régimen revolucionario, además, no desconfiaba del PAN, pues su papel como legitimador de elecciones le convenía al mismo PRI y su limitada fuerza no representaba una amenaza seria para la familia revolucionaria. Esta situación lo habilitó para administrar políticamente su transición como partido

de protesta a co-gobernante en el decenio de los 80, cuando se presentó la oportunidad.

En ese periodo, la crisis económica modificó varios puntos de referencia. La sociedad mexicana se volvió más pobre, pero más moderna (Loaeza, 1999: 64). El PAN fue el más beneficiado, mientras que el presidencialismo y el PRI comenzaron su lento pero imparable declive político. De acuerdo a la teoría de la modernización, la movilización anti-autoritaria del decenio de los 80 se explica por el uso que los sectores modernos de la sociedad —educados y urbanos, con mayores niveles de ingreso que los sectores tradicionales, los cuales son más cercanos a los medios rurales, de pobreza y menos educados— hicieron del voto de protesta un recurso para castigar al viejo régimen. No es sorprendente que el inicio del fin de los gobiernos priistas empezara en el norte del país (los más desarrollados de México) y en las urbes. Paradójicamente, el PAN —identificado como conservador y hasta confesional por la opinión pública— se erigió como el partido de los sectores modernos de México.

El panismo al prometer y comprometerse con la democracia se dio a la tarea titánica de demoler la estructura populista, construida por el leviatán revolucionario. No era fácil. Durante muchos años, el Estado populista sentó la estrategia de hacer política, basado en la relación entre masas y caudillo (institucionalizado en el presidente de la república), propio de sociedades tradicionales. Como toda relación populista, el poder se concentra en los caudillos, no en las instituciones. La representación descansa en el plebiscito, no en agentes elegidos mayoritariamente. El debate es sustituido por la asamblea informativa y los discursos nacionalistas. Sin embargo, el populismo había llevado al país a una crisis sin precedentes en 1982. El problema era enorme. Por un lado, se desplegaba un Estado con un doble déficit, democrático y de eficiencia. Por otro, los partidos políticos estaban poco institucionalizados. No era extraño. Por ejemplo, la mayoría de los analistas (v.g. Hamilton, 1972; Purcell y Purcell, 1977: 191-226; Grindle, 1977; Cosío Villegas, 1975a, 1975b; Brandenburg, 1964; González Casanova, 1970) durante las dos décadas precedentes se habían concentrado en explicar estabilidad más que transición. Los partidos de oposición no les interesaban mucho.

Para enfrentar estos retos, el PAN optó por profundizar su estrategia de participación (no la de aislamiento); su preocupación por fortalecer a los partidos minoritarios se trasladó a la

construcción de instituciones electorales independientes; la necesidad de ampliar su clientela electoral lo obligó a moverse al centro, disminuyendo el énfasis en su componente católico sin erradicarlo totalmente; la capacidad para concentrar el voto de protesta gradualmente se transformó en poder de influencia. La apuesta por la competencia democrática, que tantas frustraciones les trajo a los panistas en el pasado, ahora comenzaba a darles enormes satisfacciones. La crisis económica ayudó mucho, pues no sólo impulsó el voto de protesta y la movilización social, sino que también alteró la importancia de los agentes de socialización (escuela, familia, el trabajo), que fueron desplazados por los medios de comunicación. A partir de entonces, la sociedad mexicana, definida ampliamente por la corporativización y las tradiciones, comenzó a fragmentarse dando paso a una sociedad más individualizada e influida transversalmente por la *mass media*. La crisis política de 1988 será un gran catalizador del primer gran cambio de la estrategia panista.

El triunfo del PAN en Baja California, un estado de los más ricos del país, lo obliga a moverse de la protesta al co-gobierno. Como el Dios Jano, el PAN había tenido dos caras hasta entonces: una aislacionista y doctrinaria y otra pragmática y participacionista. La posibilidad real de alcanzar el poder condiciona a los panistas a no sólo ser leales, sino corresponsables en el ejercicio de la gobernanza mexicana. La cara pragmática del neopanismo se impone. Gómez Morín triunfa sobre González Luna. La modernidad sobre el confesionalismo. La alianza estratégica, que el gobierno y el PAN establecen, es justificada por Carlos Castillo Peraza, señalando que los panistas no tenían vocación de arqueólogos, pues no querían administrar las ruinas de un país. La obra panista no se podría construir sobre un México devastado. Cuando el PAN asumiera el poder, al ser derrotado el PRI en las urnas, quería heredar un país administrable y en paz. Esto les ayudaría a construir la patria ordenada y generosa a la que aspiraban.

De los valores a las instituciones democráticas

Entonces la opción electoral se consolidó como el camino para alcanzar el poder. La demanda histórica de los panistas de construir instituciones electorales autónomas comenzaba a ser realidad poco a poco. Esas demandas añejas incluían, por lo menos desde el decenio de los 70: “a) un padrón electoral depurado y una credencial permanente que acredite a los electores auténticos; b) integración imparcial de los organismos electorales; c) un sistema de calificación

de las elecciones que garantice los resultados reales; d) recursos para reparar irregularidades cometidas en el proceso electoral; e) desaparición de los controles oficiales, a través de las centrales obreras, campesinas y populares, que impiden la libre emisión del voto y f) rechazar el sistema de diputados de partido” (Guillén, 1989: 141).

En 1987, la demanda panista aún consistía en un doble objetivo: limitar la participación gubernamental en la organización electoral y preservar y consolidar los derechos de las minorías políticas. Esto último significaba que a pesar de sus múltiples avances, el PAN aún no contaba con las mayorías. Las demandas establecidas en el párrafo anterior —que intentaban acotar el poder gubernamental en el proceso electoral— fueron afinadas y reiteradas hasta que el PAN pudo integrarlas en las reformas de 1993 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) votada en 1990. Las propuestas fueron: “a) la formación de una autoridad independiente; b) la participación paritaria de participación y ciudadanos sin partido en la integración del padrón electoral y en las funciones comiciales; c) la elección por insaculación de los funcionarios; d) sanciones al uso indebido de recursos públicos en apoyo de cualquier partido y e) la creación de un Tribunal Federal Electoral” (Loeza, 1999: 408). Adicionalmente, proponía prohibir la afiliación partidista forzosa (con dedicatoria al PRI) y elevar de 1.5% a 2.5% la votación para que un partido mantuviera su registro (con el fin de evitar los partidos artificiales, que eventualmente apoyaban al PRI). En 1993 además se amplía las facultades del IFE, se hace equitativo el acceso de los partidos a medios de comunicación y se establecen controles al financiamiento partidista.

Si en el decenio de los 60, el PAN pugnaba por la claridad de los resultados electorales y en la década de los años 80 la realización de elecciones libres, en el decenio de los 90, el PAN se concentra en acciones sustanciales, como la voluntad política del gobierno y equidad en las elecciones, enfatizando la erradicación de prácticas tradicionales (por ejemplo, prácticas de acarreo, clientelares, compra del voto, entre otras), más que asuntos legales. El PAN se enfilaba a operar con eficacia muchos de sus triunfos, sobre todo, en el periodo en el que Carlos Castillo Peraza era su jefe nacional (1993-1996).

En el tránsito de “hacia Los Pinos” a “Los Pinos”, el PAN vive cambios inéditos, a tal grado que Felipe Calderón, sustituto de Castillo Peraza al frente de Acción Nacional en la segunda mitad del

decenio de los 90, ofrece como propuesta de campaña el de ganar el gobierno sin perder al partido. Los panistas se sentían cerca del poder. Y lo alcanzaron. “Cuando llegó su momento histórico, a fines del siglo pasado, el PAN encontró un caudillo que no sabía de bregar eternidades” (Krauze, 2005: 3), como proponía Gómez Morín, aludiendo el largo camino para ocupar la silla presidencial. “(...) Haber ‘movido las almas’ como Madero lo hizo en 1909 y Vasconcelos en 1929, será el aporte de Vicente Fox a la historia mexicana, un aporte que sólo la mezquindad y la falsificación pueden escatimarle” (Krauze, 2005: 3).

Los retos del PAN

Ganada la presidencia de la república, los panistas tienen efectivamente el reto de no perder su partido. Por un lado, tiene que definir con claridad la relación con el ejecutivo, dada la desastrosa distancia que mantuvo con Vicente Fox. Por otro, el PAN debe implementar un cambio organizacional para consolidarse en un partido moderno de cuadros. “El PAN puede clasificarse como la ‘variante mexicana’ del moderno partido de cuadros. Para verificarlo, pueden verse las reformas, el tamaño de la membresía, las votaciones internas, así como comparar la extensión y la actividad extraparlamentaria de la organización, esto es, sus acciones para vincularse con organizaciones sociales, más allá del voto duro” (Morales, 2006: 39).

Las reformas organizacionales implementadas por el PAN a raíz del triunfo presidencial de Vicente Fox, fueron la relación partido-gobierno y la creación de infraestructura política para convertir a Acción Nacional en un partido profesional electoral. Adicionalmente, el PAN se ha preocupado por el arribismo y la participación de nuevos miembros; la generación de identidades colectivas (principios doctrinarios); y el fortalecimiento organizacional, en el que se han emitido “manuales para homologar la función del Partido en todas sus subunidades a lo largo del territorio nacional” (Morales, 2006: 37).

Sin embargo, los conflictos serán las divisiones regionales en los que el PAN se organizará para enfrentar las elecciones, pero sobre todo la definición de candidaturas, pues el poder de los gobernadores y cacicazgos familiares ha empezado a cerrar al PAN como organización. Las disputas internas pueden convertirse irreconciliables, a pesar de la tradición panista del compromiso

institucional para dirimir sus diferencias. Es un hecho hoy que el partido mexicano que menos ventila sus asuntos internos a la luz pública es precisamente el PAN. La cerrazón de los comités directivos estatales puede poner fin a esa institucionalidad.

No es sorprendente que para varios analistas, (v.g. Daniel Moreno y Raúl Trejo), el reto del PAN es su vínculo y apertura con la gente (Reyes, 2006). Para un panista como Alejandro Zapata Perogordo, el reto de Acción Nacional es también la capacitación y la formación de nuevos militantes y adherentes (Reyes, 2006). De hecho, el PAN –para enfrentar estos problemas— ha estado ensayando nuevos métodos de elección, donde participa toda la población y no sólo los militantes panistas, como sucedió en Chihuahua en 2004. También, el Partido ha incorporado a gobernadores y presidentes de los comités directivos estatales en el Consejo Nacional –y la presencia de los primeros en los consejos directivos—, como mecanismo para hacer más democrática la toma de decisiones partidistas. Finalmente, ahora que el PAN ha vuelto a ganar la presidencia de la república, debe consolidar el federalismo y la división de poderes, la ley de transparencia, el combate a la pobreza extrema, la estabilidad macroeconómica y la cobertura de salud. También debe consolidar su preocupación en temas públicos y no en los morales.

Hoy, Acción Nacional ha dejado de ser un misionero para convertirse en un pragmático de la democracia. Sus aportaciones ya no se limitan a la formación de ciudadanos, sino también alcanzan la construcción de instituciones gubernamentales, cuya lógica es el funcionamiento dentro de reglas democráticas y no autoritarias, como aquéllas que construyó el leviatán revolucionario, durante 71 años. El papel como partido gobernante le ha generado al PAN nuevos retos organizacionales internos, aunque también nuevas apuestas políticas, como la participación creciente de grupos radicales conservadores a su interior, cuya vocación democrática y de tolerancia no son las más óptimas.

El arquitecto: el diseñador de institucionalidad

Las múltiples funciones del PRI (como organización de masas y corporativista, e instrumento electoral, de control político y cooptación) legitimaron al régimen de la revolución por medio de elecciones frecuentes, reclutamiento de personal político, que generaba una alta movilidad de las elites y establecimiento de

vínculos entre autoridades y población. Además el estilo mexicano de gobernanza impulsó ampliamente la participación política de las organizaciones sociales (v.g. las corporaciones del PRI) y estrategias de inclusión para enfrentar a los oponentes políticos. Como resultado, los gobiernos revolucionarios aseguraban apoyo político de las masas (a través del PRI), o al menos su neutralidad (las corporaciones del Partido inhibían a las organizaciones independientes), cuando lanzaban sus políticas públicas.

El PRI y sus corporaciones contribuyeron, de esta manera, a la estabilidad política, al mezclar democracia liberal y discurso revolucionario durante más de 71 años. Esta estrategia ayudó al régimen a justificar su autoritarismo, mientras llevaba a cabo elecciones frecuentes (cercano a las ideas del capitalismo y la libertad) y generaba apoyos sociales usando un discurso radical (con el socialismo). En este contexto, el PRI tuvo pocas amenazas para perder alguna elección. Pero lo más importante de este régimen fue que la estabilidad política fue administrada invariablemente por un poder civil desde 1946 y sin violencia.

El PRI fue el agente corporativo central de una compleja y amplia estructura constituida por tres sectores (obrero, campesino y popular) formadas por una membresía masiva: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Estas corporaciones le dieron al PRI un dinamismo fundamental *a)* para convertirse en el instrumento vinculante entre el presidente y la sociedad y *b)* para ejercer su importantísimo rol como agente de legitimación electoral, de control de organizaciones de masas y de implementador del populismo distributivo.

El PRI nació para legitimar al régimen revolucionario más que para competir por el poder. El partido de la revolución fue el símbolo más genuino del autoritarismo mexicano institucionalizado, dándole al régimen estabilidad política de largo plazo. Mientras el PRI servía para administrar las corporaciones (y como consecuencia las nominaciones políticas, congreso, las cortes, gobernadores, alcaldes), las organizaciones del PRI promovían las políticas gubernamentales en la sociedad, representando aparentemente los intereses de sus miembros. Esto fue posible gracias a un sistema de lealtades verticales, donde la cooptación era la estrategia clave. Esta maquinaria política funcionaba por medio del control ejercido por el PRI, conducido en la práctica por el Presidente, sobre las

nominaciones de gobernadores, quienes a su vez repetían la misma mecánica en sus respectivos estados.

Así, los gobernadores controlaban al PRI local, el cual a su vez administraba las nominaciones regionales sobre los caciques locales, quienes influían las posiciones más micro locales, como el líder ejidal (forma de propiedad comunal de la tierra, donde la toma de decisiones es de manera colectiva). Finalmente, el populismo distributivo era una expresión del Estado patrimonialista, que se legitimaba por las prebendas que repartía a cambio de votos (por ejemplo, la autoridad daba tierras, semillas, empleos, subsidios, mientras los campesinos o los obreros otorgaban apoyo político).

Todo este diseño institucional comenzó a modificarse a partir de 1982, con la crisis económica derivada de las políticas populistas de Luis Echeverría y José López Portillo. En este escenario, el PRI comenzó a deteriorarse electoralmente. Su eficiencia como legitimador del régimen declinó también. La cohesión social que había construido comenzó a despedazarse. Las reformas económicas y el cambio estructural implicaban romper con el viejo pacto construido en el decenio de los 20 y 30. El costo político significaba también compartir el ejercicio del poder y hacer concesiones, sobre todo, al PAN cuya estrella ascendente parecía imparable en varias regiones. Para implementar las políticas de ajuste ortodoxas, el gobierno usó estrategias heterodoxas, contribuyendo el PRI una vez más a la estabilidad política de México. El corporativismo, amalgamado por el PRI, se comprometió a mantener mediante estrategias concertadas los precios, los salarios y la inflación a niveles bajos. La disciplina, la institucionalidad y la gobernanza construida por la revolución se pusieron al servicio de la reforma económica.

Las reformas modificaron el escenario social de México entre 1982 y el 2000. El éxito económico no se manifestó adecuadamente en el bienestar social, mientras el PRI rompió el viejo pacto con los grupos sociales que lo apoyaban. Éstos, de hecho, pagaron el costo de las reformas, que afectaron a) la caída de los estándares de vida, b) el bajo crecimiento del empleo y c) la creciente desigualdad del ingreso.

Los pobres y la clase trabajadora vieron reducir el gasto público, pues esto contribuía a bajar la inflación. La cancelación de subsidios y beneficios fueron las principales divisas del ajuste económico. Algunas políticas de mercado concentraron beneficios en grupos específicos sin generar externalidades positivas más allá de

ellas. Por ejemplo, en la administración del presidente Salinas, el comercio incrementó las exportaciones no petroleras (especialmente los bienes manufacturados), haciendo que las exportaciones crecieran 38% en el periodo 1989-1992. No obstante, para 1994 el empleo en el sector manufacturero había declinado aproximadamente 33%, comparado con niveles de 1980 (véase Pastor Jr. y Wise, 1998: 41-81).

Mientras el gobierno enfrentó con éxito la inflación (reduciéndola de 98.9 a 7.1 entre los decenios de los 80 y los 90), el lento crecimiento del empleo fue su talón de Aquiles. Desde finales de la década de los años 80, la economía formal absorbió a menos de 30% de más de un millón de población económicamente activa (PEA) anualmente, mientras el resto entró a la economía informal. Además, mientras la economía mexicana creó 1.5 millones de nuevos empleos entre 1988 y 1993, perdió 500,000 en las reorganizaciones corporativas inducidas por la crisis de deuda de México (Cornelius, 1994: xi-xx). Después de más de una década de reformas, la desigualdad del ingreso y las disparidades regionales permanecían altas con 23% de la población viviendo con menos de dos dólares al día (OECD, 2002: cap. 3). Fue claro, entonces, que los grupos financieros más importantes habían desplazado a los sectores populares (trabajadores, campesinos y clases medias) como los agentes de apoyo clave del régimen revolucionario.

En el lado político, las reformas rompieron prácticamente todos los consensos dentro de la familia revolucionaria. El ala populista del PRI (la izquierda) se escindió. Este rompimiento a) influyó en las elecciones más controvertidas de la historia de México (1988), marcadas por la sombra del fraude electoral, y b) dio nacimiento al actual partido de centro-izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Por el lado social, las reformas dañaron seriamente las alianzas políticas del PRI con los obreros (las privatizaciones con frecuencia requerían despidos masivos y reducción de concesiones laborales); campesinos (recorte de subsidios a los bienes agrícolas y el fin del reparto agrario); y las clases medias (aumento de impuestos, reducción de los beneficios sociales y recorte a los subsidios de los servicios públicos).

La crisis económica coincidió con la sucesión presidencial, condicionando el futuro político del presidente entrante. Mientras Carlos Salinas concentró demasiado poder en la presidencia, su sucesor Ernesto Zedillo optó por gobernar con las reglas de la ley. Así Zedillo se basó en la constitución más que en las leyes no escritas,

cediendo parcialmente su rol como líder del PRI, promoviendo una competencia electoral más justa e impulsando la independencia del poder judicial.

El resultado de este proceso fue el triunfo del PAN en las elecciones federales para la presidencia de la república en 2000. Paradójicamente, el éxito de las reformas económicas le hizo perder el poder al PRI. La liberalización económica consolidó la liberalización política. En lugar de detener este proceso, el presidente priísta sacrificó a su partido en bien de la estabilidad política del país. Así, parece haberse cerrado el ciclo político del PRI como un factor fundamental para la estabilidad e institucionalidad del México del siglo XX. El PRI nació para dar orden al país y, cuando la situación cambió, el sacrificio del Partido sirvió para continuar con la misma estabilidad.

Los retos del PRI

Los retos del PRI se encuentran en a) su democratización interna y en la relación entre su estructura territorial y los gobernadores y b) en generar una nueva identidad colectiva. Hoy, uno de los poderes más importantes dentro de ese partido es el de los gobiernos estatales. Desaparecido el poder presidencial, los nuevos *tlatoanis* tienen un carácter regional. Las alianzas políticas se hacen en los estados y las regiones. El PRI en la última elección nacional, donde no ganó un solo estado, ha recibido el primer anuncio de lo que puede venir si no implementan un cambio organizacional profundo para incorporar nuevos actores bajo nuevas reglas en la toma de decisiones partidistas.

El PRI desapareció como el único partido nacional. Hasta el 2000, el PRI era el único partido que tenía militantes y votaciones significativas a lo largo del país. Ahora se ha convertido en un partido regional y en una tercera fuerza política a nivel nacional. Aunque parece difícil, el PRI puede intentar democratizarse. Hay quienes dudan de esto. Por ejemplo, para Jorge G. Castañeda (2005), reformar al PRI —regresando a sus orígenes— es algo imposible porque significaría que se desembarazara de lo que fue su génesis: el autoritarismo y la corrupción. En este contexto, Castañeda señala que lo bueno y lo malo en el PRI no se puede separar, pues son las dos caras de una misma moneda. Para Castañeda, finiquitar al Doctor Jekyll significaría acabar con el Sr. Hyde.

El PRI sufre más o menos del mismo problema que el PAN a nivel regional, aunque por diferentes razones. A diferencia del PAN, donde las instancias partidistas pretenden influir a las autoridades elegidas por la población, en el PRI los agentes gubernamentales pretenden (y de hecho lo hacen) manejar los asuntos de la vida interna del Partido. Esto es una tradición política en la relación gobierno/PRI. El problema es que ahora no hay un árbitro central que pueda equilibrar los abusos y excesos de algunos gobernadores. La estructura territorial parece aún una extensión del gobierno estatal.

Esta situación deriva en un serio problema para el PRI y la democracia. Cuando el PRI pierde un estado con dificultades se recupera (con las excepciones de Chihuahua y Nuevo León). Esto se debe a la falta de iniciativa de la estructura territorial del PRI. Su falta de democratización interna no le permite a los priistas discutir, debatir o proponer. Los priistas solo saben conjugar el verbo obedecer. El PRI debe modificar su cultura organizacional de partido de “soldados” a partido de “ciudadanos”. Mientras los primeros sólo saben pelear, los segundos saben planear estrategias de batalla. Si pueden resolver esto, su adaptación a la democracia podrá ser más exitoso.

La ventaja del PRI es que es un partido entrenado para la sobrevivencia. Su principal fuerza es también su principal debilidad. La cultura autoritaria le permite disciplina, pero también escasa creatividad para enfrentar la vida democrática. Su estructura es útil para ganar votos, pero no le permite crear nuevos patrones democráticos que lo puedan renovar. Ha construido valores en la sociedad mexicana, que le ha generado una base social amplia. De hecho es el partido con mayor voto duro (de aproximadamente 22%). El PAN y el PRD cuentan con un voto consolidado de alrededor de 19% y 15%, respectivamente.

Finalmente, el PRI debe crear una nueva identidad colectiva que entrene a sus miembros a ser una oposición leal, generando la imagen de institución confiable no sólo frente al partido gobernante, sino frente a la ciudadanía (público elector). El problema no es sencillo, en vista de que el PRI se cohesionaba por la cultura del poder. Lo que hacía comunes a los priistas era la cultura del mando, el amor por gobernar y ocupar los cargos representativos más importantes. Los priistas asumían que habían nacido para mandar; los demás para obedecer (alguna vez Emilio González, viejo líder cetemista, llegó a decir que la oposición vivía en el error). El fuerte

liderazgo presidencial (que ya no existe) y las expectativas casi seguras de llegar al poder (que tampoco es vigente, pues el PRI ya no es garantía de triunfo en las elecciones) les hacían militar en el mismo partido. Finalizada la era revolucionaria, el PRI tiene que generar un nuevo imaginario colectivo que una a sus militantes. De lo contrario, desaparecerán.

El PRI fomentó reglas eficientes para la gobernabilidad y fue un instrumento clave para: a) construir instituciones sociales, varias de ellas vigentes hoy (*v.g.* el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Reforma Agraria); b) disciplinar a la clase política que dio una larga estabilidad política al país; e c) implementar una serie de reglas no escritas que sirvió para llevar a cabo políticas redistributivas y conflictivas (Purcell y Purcell [1977: 164-84] mencionan, por ejemplo, la política de reparto de utilidades en las empresas mexicanas; la reforma agraria es un caso por excelencia) manteniendo la paz social (a diferencias de otras realidades latinoamericanas, donde el conflicto en ocasiones hizo ingobernable a esos países), y para diseñar estrategias políticas que condujeran a objetivos económicos, como los pactos del decenio de los 80. A pesar de sus fuertes pasivos políticos, sería mezquino regatearle al PRI el mérito de haber construido institucionalidad y procurado estabilidad social, necesarios para el avance democrático de cualquier país. De hecho, sin la paz social de los últimos dos decenios del siglo XX, México difícilmente hubiera tenido una transición tan tersa y exitosa, como la de los últimos años.

Robin Hood: La lucha por los pobres

Las más de las izquierdas de México se llevaron poco con la democracia liberal en el siglo XX. Más bien nacieron a espaldas de ella.

En su versión comunista, fundada por un activista hindú, (la izquierda) apareció en México en 1919 y se dividió muy pronto en infinidad de corrientes, capillas, partidos, grupos, sectas, cofradías. Abanderada por artistas extraordinarios y dogmáticos como Rivera y Sequeiros; encabezada por grandes líderes ideológicos y sindicales, demasiado dóciles a las consignas de Moscú (Lombardo Toledano); representada, muchas veces, por intelectuales rectos (Narciso Bassols), escritores notables, honestos, cristianos sin fe y proclives al martirio (José Revueltas); peleada a muerte con el sistema y a menudo consigo misma, la izquierda había sido proscrita en tiempos de Calles y el maximato, aliada en tiempos de Cárdenas, alejada en los de Ávila Camacho,

perseguida por Alemán, tolerada con Ruiz Cortines, resurgente con López Mateos, insurgente y libertaria frente a Díaz Ordaz, radical y guerrillera contra Echeverría. A fines de los setenta y gracias a las reformas propuestas e instrumentadas por Jesús Reyes Heróles, los diversos grupos y partidos de izquierda comenzaron a ponderar la posibilidad de incorporarse a la vida parlamentaria. Algunos obtuvieron su registro. El caso más notable fue el grupo de Heberto Castillo...otros más jóvenes e intoxicados todavía de un marxismo crepuscular, no dudaron en expresar su desprecio por la democracia “formal” y “burguesa”. Fueron los menos. (Krauze, 2005: 10).

La principal aportación de las izquierdas a la democracia liberal mexicana ha sido reciente. En 1988, después de las controvertidas elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas sirvió al país de dos maneras (por cierto, no suficientemente reconocidas): “logró preservar la estabilidad del país y condujo finalmente a la izquierda por un camino poco transitado: el de la vida parlamentaria” (Krauze, 2005: 7). Adicionalmente, las izquierdas de México habían puesto “el cuerpo para conquistar espacios democráticos” (Gómez, 2005), tal como lo hicieron en 1968 cuando grupos estudiantiles demandaban derechos políticos. De hecho, para Roger Bartra (2005):

La izquierda mexicana es, en cierto modo, la gran responsable moral de la transición democrática. Paradójicamente en el año 2000, cuando cristaliza la democracia, la izquierda pierde el paso, queda relativamente marginada y no digiere el triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales. Desde 1968, la izquierda había impulsado el lentísimo crecimiento de una cultura democrática; 20 años después encabezó la lucha democrática y aunque el fraude impidió su triunfo, las elecciones de 1988 iniciaron el tramo final de la transición democrática. Durante los siguientes 12 años la izquierda se mantuvo como el principal motor de la instauración de procesos electorales confiables y vigilados por instancias autónomas. Sin embargo, nuevas fuerzas de derecha moderna, encabezadas por Vicente Fox, lograron ganar las elecciones presidenciales del año 2000. El PRD vivió en forma dramática su fracaso y reaccionó como si injustamente le hubieran arrebatado, mediante artificios publicitarios, el poder que merecía haber ganado.

Sin embargo, la principal aportación de las izquierdas ha sido en el campo de la agenda social, asuntos más cercanos a la democracia directa. De manera particular, la izquierda institucional (el PRD y sus antecedentes directos como el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, o incluso otros un poco remotos con el Partido Comunista Mexicano, PCM) ha enfatizado esto. Por ejemplo,

Semo (2005) señala que entre 1960 y 2000, la principal lucha de la izquierda fue la defensa de la ley, especialmente de los artículos 123 y 27 constitucionales. De hecho, para esta izquierda, la democracia es en realidad la defensa de los derechos sociales de campesinos u obreros y demás grupos económicamente en desventaja, aunque éstos no tengan el más mínimo interés ni respeto por los derechos civiles de otros sectores y grupos sociales. El hecho de ser de la clase explotada es suficiente razón para que esa izquierda los defienda, sean esos camaradas autoritarios o no.

Esa izquierda institucional premió la política y no la productividad en sus sectores de influencia. Primero fueron los sindicatos, después la universidad. En el primer caso, la defensa de los derechos de los trabajadores implicó que fuera el sindicato y no la evaluación el que llenara las vacantes. Como consecuencia, en esas agrupaciones pronto la herencia del puesto se hizo rutina. Luego la izquierda institucional defendió la bandera del pase automático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un desafortunado e injusto sistema que premia la mediocridad y la antigüedad y no la eficiencia del desempeño estudiantil.

Desde su génesis, el PRD buscó la transición institucional como objetivo. En su agenda se incluía tareas concretas pero complejas: dismantelar las ventajas insanas del PRI, fundar instituciones sobre bases de equidad y neutralidad; crear un órgano electoral autónomo del gobierno; generar un acceso equitativo de los partidos al financiamiento público y a los medios de difusión. Además desde el congreso empujaban reformas profundas del régimen político, que según Semo (2005) costaron al PRD más de 400 vidas. No se diga sobre los asuntos de acceso universal y gratuito a la educación, la salud y el trabajo; las posturas nacionalistas en relación a la política energética (en la perspectiva de la izquierda institucional el nacionalismo es una postura progresista) y en la defensa de los salarios. El triunfo ayudó al PRD a madurar y moderarse.

Las elecciones constantes, donde su candidato presidencial perdió tres elecciones consecutivas, otorgaron al PRD una rutina creciente de compromiso con la democracia liberal. A pesar de esos descalabros, el PRD formó políticos profesionales competentes y, mejor aún, gobernantes obligados a responder a las demandas ciudadanos y no a protestar. La izquierda maduraba, se moderaba, porque se volvía co-responsable de los asuntos públicos. Hoy, los

casos más notorios son los gobiernos de Zacatecas y Michoacán, sólo por mencionar unos ejemplos.

Sin embargo, en la izquierda estos valores no maduraron del todo. Varios autores (v.g. Semo, 2005; Mercado y Martínez, 2005; Bartra, 2005, 2006; Reyes Heróles, 2006) destacan el suspicaz compromiso de la izquierda con la democracia liberal. Aquélla está comprometida con la democracia liberal hasta donde le conviene y con la revolución o “la verdadera democracia” hasta donde sea necesario. Esto es, un gran sector de la izquierda sigue creyendo que sólo la revolución puede abrir un cambio en favor de los trabajadores. “La democracia no es un fin, sólo un medio” (Mercado y Martínez, 2005; Semo, 2005) para lograrlo. El principio socialista y hasta radical de esa izquierda siempre ha menospreciado la democracia liberal, a tal grado que su posición ante ella es la de “cúmplase democracia y legalidad en los bueyes de mi compadre” (González, 2005).

Un gran sector de esa izquierda institucional, de orientación conservadora por su condición de no querer cambiar ni entender las enormes transformaciones recientes en el mundo y México, supone que el único *cambio verdadero, real* es aquél en el que cree. Esa democracia es la de carácter popular, no la liberal. Para Bartra (2005), esta izquierda tiene dos sustentos importantes: las fuerzas políticas impulsadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las que agrupa López Obrador. “En lugar de fomentar la expansión de una nueva cultura democrática, éstas fuerzas han contribuido –cada una a su manera– a la expansión de las viejas expresiones dogmáticas, nacionalistas, populistas, paternalistas y autoritarias que se identifican con el extinto bloque socialista y con la larga dictadura del PRI”.

Estas fuerzas políticas asumen que México no vive una transición democrática, sólo una alternancia, pues la *verdadera democracia* sólo será realidad cuando el pueblo, es decir, ellas alcancen el poder. Es más, el gobierno de Vicente Fox –el primer presidente elegido democráticamente desde Madero– no tiene legitimidad y es tanto o más manipulador que los del antiguo régimen de la revolución. Peor aún, Felipe Calderón es un presidente espurio y las instituciones electorales y judiciales son parte de complots y son susceptibles de ser corrompidos. Esta izquierda institucional aun continúa con la antigua idea de que varias conductas ilícitas son legítimas porque la ley es parcial (no hay Estado ni ley neutrales). En su concepción, no hay que tomar el

poder por la vía de las urnas, hay que asaltarlo. Desde ahí impulsar las grandes transformaciones sociales.

Los retos de las izquierdas

El gran problema de las izquierdas de México y quizás del mundo hoy es su incapacidad para *entender* y *cambiar*, lo cual resulta en un gran problema para la democracia contemporánea. Gran parte de la izquierda institucional mexicana (fundamentalmente el PRD) hoy es su incapacidad para *entender* la diversidad, es decir que la igualdad pasa por la diferencia, no por la uniformidad, como la concibieron las revoluciones del siglo XX.

A la izquierda institucional le ha faltado también capacidad para redefinirse como motor del *cambio* y es que, en gran medida, se ha vuelto una fuerza de conservación y tradición más que de modernización y transformación: sus líderes políticos han carecido de claridad de objetivos y de estrategias para adaptarse a la globalización, mientras sus intelectuales han pecado de anacrónicos (incapacidad para la tolerancia, para mutar de luchadores sociales a líderes de opinión, para entender la diversidad y cambiar sus objetivos de lucha, que significa defender a los discriminados y no sólo a los pobres) y de falta de visión (se oponen a la globalización porque no la entienden).

Basta leer las opiniones de Elena Poniatowska (*El Universal*, 2006) y Carlos Monsiváis (*El Universal*, 2006) sobre Patricia Mercado, Marcos y Cárdenas recientemente. La primera tachando a los tres de envidiosos por no apoyar a Andrés López Obrador en su lucha post-electoral. El segundo ironizando el papel del Partido Alternativa y de Mercado como una opción política y electoral. Una y otro hablan de democracia desde la intolerancia (“la crítica soy yo”), reflejando el viejo problema de la intelectualidad de la izquierda mexicana: a todos los grupos y fuerzas políticas hay que evaluarlos por lo que hacen, a la izquierda por su grado de indignación (la crítica como ejido).

La izquierda institucional, acostumbrada al tribalismo y el caudillaje, es incapaz de aceptar la diferencia y mucho menos la diversidad. Le es indiferente el medio ambiente y le espanta hablar de eutanasia, aborto o de derechos civiles de los homosexuales. No entiende que ha perdido la bandera del progresismo porque simplemente no está de lado de las minorías, ni tampoco representa sus intereses. En esta izquierda, la demagogia con frecuencia triunfa sobre la democracia (“el pueblo soy yo”), el autoritarismo seduce a

las libertades (“la democracia soy yo”) y el martirologio a la razón (“la víctima soy yo”; “como fui reprimido, tengo derecho a hacer lo que quiera”). No es una sorpresa que esa izquierda confunda con facilidad el concepto de derecho con arbitrariedad, delincuencia con lucha social, igualdad con uniformidad, negociación con arreglos oscuros, participación con asambleísmo, moral con política, democracia con caos, liderazgo con mesianismo, apoyo social con paternalismo, política social con clientelismo, lo popular con populismo.

Aunque la izquierda mexicana puso “el cuerpo para conquistar espacios democráticos”, en general, ha mostrado muchas dificultades “para resolver su relación con la democracia y la legalidad, aun cuando hoy sean referentes casi universales” (Gómez, 2005). Cuando la democracia y el Estado de derecho comenzaron a concretarse, las izquierdas entraron en una crisis de objetivos. Las izquierdas “mostraron no estar preparadas para esta nueva etapa del país ni para las nuevas sensibilidades de la sociedad mexicana” (Mercado y Martínez, 2005).

El problema radica en su incapacidad para cambiar su visión y accionar e interpretar las nuevas realidades. En su profundo conservadurismo, la izquierda institucional se asume como una bondad por naturaleza (los malos son todos los demás, así que son estos los que deben modificar su conducta, porque son perversos, corruptos, sospechosos, enemigos, vendidos, representantes de intereses oscuros y de la extrema derecha). Como la izquierda es buena, no tiene porqué cambiar. Si los demás no cambian, entonces hay que obligarlos a mutar y a purificarse, les guste o no (“la democracia soy yo”, aclamado por “el pueblo soy yo”).

La izquierda institucional ha carecido de claridad para interpretar los cambios del siglo XX. Hoy, las transformaciones se pueden explicar más por la sociedad desorganizada que por la civil; más por los individuos que por las familias (por ejemplo, los divorcios ahora son comunes [la mitad de las parejas casadas mexicanas se divorciaron en 2000 y una quinta parte de las familias hoy son encabezadas por madres solteras, de acuerdo a Cordera y González (1999:295)]; más por minorías que por grandes mayorías; más por el poder de la urnas que de las marchas. La izquierda institucional, al haber perdido su capacidad de cambio, no ha entendido que las transformaciones sociales no tienen porque adaptarse a los estatutos de ningún partido de izquierda.

Mientras México (y el mundo) ha cambiado, los políticos y los intelectuales de la izquierda institucional han envejecido. Peor aún, se han vuelto anacrónicos. Sus conceptos de progresismo, transformación, cambio, liberalismo, laicismo, revolución, liderazgo son, por lo menos, inconsistentes en el mundo de hoy. Gran parte de esos intelectuales siguen justificando la participación social de las masas sin pasar necesariamente por el respeto a la ley (v.g. Meyer, 2006), aunque el consenso comienza a romperse. Bartra (2006), por ejemplo, no duda en criticar ferozmente el *populismo conservador* de Andrés López Obrador.

El distanciamiento de la izquierda institucional con los jóvenes y los sectores más educados es elocuente. Encuestas recientes señalan que la población más educada y la más joven (clientela más cercana a las izquierdas en el mundo) de México votó mayoritariamente por el PAN en las elecciones pasadas. Lo mismo fue con Vicente Fox en el 2000. Basáñez (2006), comentando una encuesta de *Reforma* de junio de 2006, apunta que por Felipe Calderón hubo una ligera inclinación de la población menor a los 35 años, mientras que la gente con niveles superiores a la preparatoria favoreció por 9 puntos al mismo candidato. A diferencia de las izquierdas chilena o española, la mexicana ha perdido claridad en objetivos y estrategias; “no ha logrado construir nuevas metas, prefiere ignorar las ruinas en que vive (y) responder a toda novedad con viejos tics. Así es como ya no sabe uno si está leyendo una declaración de Manuel Bartlett o de Pablo Gómez” (González, 2005).

El dilema de las izquierdas es cambiar o condenarse al fracaso y a la frustración. Es fundamental que el PRD se defina clara y contundentemente en favor de la democracia liberal y el respeto por la ley. No es ético que varios de sus integrantes critiquen con la mano izquierda (que desprecia el sistema democrático) y sigan cobrando con la derecha (salarios que provienen de los impuestos, considerados dentro del sistema democrático [poco auténtico y verdadero, en su perspectiva]). La democracia no se puede aceptar a medias. Se le puede reformar, poner candados, establecer parámetros, hacer ajustes, pero no se puede aceptar a conveniencia. No es un secreto: si el PRD quiere ganar más electores, debe moverse al centro y mostrarse más moderado, responsable, maduro, sensato, negociador, confiable.

El PRD debe concentrarse en las correcciones que deben hacerse a la democracia mexicana y en su propia introspección: fortalecer la transparencia electoral, muy necesaria en varias

regiones del país; combatir decididamente el clientelismo, que es el principal enemigo de la construcción de la cultura ciudadana; ampliar los mecanismos institucionales (eficientes, no demagógicos) para incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones, dejando atrás su obsesión por las mayorías (que se convierten eventualmente en tiranías, como por ejemplo, la *dictadura* del proletariado); reconciliarse con su pasado liberal (defensora de libertades y respeto por la ley), dejando atrás su presente conservador y hasta obsoleto; incorporar los asuntos sociales en la globalización, dejando atrás su rechazo sistemático y hasta irracional a ésta; convertirse en un puente político de madurez y negociación fina para contribuir a la gobernabilidad del país, dejando atrás sus poses de quinceañera caprichosa, que no tuvo los chambelanes que deseaba. Tareas adicionales del PRD son: modernizarse y concentrarse en el futuro, dejando atrás su obsesión por la historia como fin y no como medio para entender el porvenir; convertirse en un partido de cuadros que le otorgue mejores resultados electorales y de gobierno; globalizarse y no refugiarse en su aldea (llena de tribus) esperando a que los cambios mundiales dejen de atormentarlo.

Esto significaría que la izquierda institucional tenga una perspectiva integral del mundo contemporáneo en lugar de su visión parroquial anacrónica; que se preocupe más por los jóvenes del 2006 que por los de 1968; que abandere a los discriminados (madres solteras, partidarios del aborto, homosexuales, ambientalistas, defensores de los derechos humanos) y no solo a la clase trabajadora (muchos de ellos poco vulnerables, como los sindicalizados y ambulantes); que sustituya su dogmatismo por la racionalidad (por ejemplo, dejar de pensar que México gana más integrándose a América Latina que a América del Norte); que haga prevalecer en su vida interna los mecanismos institucionales por sobre los carismas indestructibles. La izquierda institucional debe comprometerse con la democracia “pues de ello dependerá, en gran medida, su viabilidad como opción de gobierno” (Gómez, 2005).

A pesar de sus múltiples problemas y su enorme esquizofrenia entre democracia representativa y revolución social, las izquierdas han hecho una gran aportación a la democracia. Como dice Bartra (2005, 2006) la izquierda es la responsable moral de la transición. Ahora falta que se convierta en factor de consolidación democrática. Es cierto, el grado de frustración en la competencia electoral desde 1988 le ha traído al PRD muchas desilusiones, la más reciente ha sido además una derrota inesperada. Por consecuencia, más dolorosa. No es una profecía, más bien un dato

para dimensionar la lucha electoral del PRD: el PAN tardó 60 años en ganar la elección presidencial, esto es 60 años de frustraciones y de caminar cuesta arriba. El PRD no se tardará 60 años para gobernar al país, pero si no cambia, el camino “hacia Los Pinos” estará lleno de muchos más infortunios y fracasos. El PRD debe ser más humilde y más honesto: debe dejar de hablar de “los de abajo” desde arriba; de sencillez desde la arrogancia; de honestidad desde el chantaje. No es digno de una fuerza política que, se esté de acuerdo con ella o no, es un punto de referencia y un elemento indispensable para la joven democracia mexicana.

La transición

Cansino (2005: 378-9) señala que toda transición tiene dos momentos: uno de desmantelamiento y el otro de rediseño institucional. El primero tiene que ver con una desestructuración simbólica y normativa del antiguo régimen, así como con el grado de compromiso de los actores políticos con la democracia (medida por la lejanía/cercanía con los agentes autoritarios del viejo régimen). El segundo depende de la efectividad del primer proceso, pues ello potenciará la fuerza y velocidad de la transición. En la medida que las viejas instituciones y tradiciones se destruyan, se aceptarán las nuevas –comprometidas con la democracia. Desde esta perspectiva, la transición mexicana es muy lenta e imprecisa, pues lo viejo y lo nuevo parecen tener la misma vigencia.

El gobierno de Vicente Fox cometió varios errores. El primero fue no desmantelar al antiguo régimen. Falló el método. Más bien no existió, pues no hubo ni pacto ni ruptura con la familia revolucionaria. Y cuando el presidente Fox quiso actuar, ya era tarde.

La influencia de sus colaboradores, divididos en dos bandos respecto a la transición, señalaba caminos encontrados. Uno encabezado por el canciller Castañeda, el otro por Santiago Creel (Espinosa, 2002). El primero aconsejaba el rompimiento con el PRI a través de la estrategia de premiar a los priistas que apoyaran al nuevo gobierno y castigar sin miramientos a quienes intentaran combatirlo. En esta perspectiva, el aniquilamiento del PRI era una condición necesaria para llevar a cabo la transición, pues ese partido era irreformable. La estrategia de Creel, en cambio, era la de pactar la transición, pues era “la hora de los acuerdos” (Espinosa, 2002). La ausencia de una estrategia para el cambio generó una parálisis

política y una esquizofrenia en el gobierno federal. Un día se declaraba en contra de las normas vigentes, pero no proponía nuevas reglas en su lugar. Un día el presidente Fox hablaba de manera conciliatoria y al otro, influido por los rupturistas, enfrentaba al congreso.

El segundo error fue anteponer las reformas necesarias a la reforma del Estado. Es decir el presidente Fox trató de reformar primero las políticas, no la política. El problema es que las instituciones creadas por la revolución tenían y tienen la lógica de funcionamiento en un sistema autoritario. Con ellas no se negocia, se les ordena lo que hay que hacer. Sin establecer nuevas reglas en el pacto Estado/obrerros-congreso-empresarios-sindicatos, el Presidente quiso reformar las leyes laboral, energética y fiscal. Peor aún, trató de convencer a la sociedad, cuando su interlocutor era el congreso. Y así estuvo fracaso tras fracaso, corrección tras corrección, retrocediendo y rectificando. Y en la lógica de una cultura autoritaria, el que recula es débil, no democrático.

El tercer error fue someter la ley y la autoridad del Estado a las presiones sociales (como marchas y bloqueos). La ley no se negocia, se aplica. El mensaje que se envió a la sociedad fue que la protesta y no la ley era el método para que el gobierno pusiera atención a los problemas. Fue el caso de los macheteros de Atenco y de varios de los movimientos sociales que vinieron después. En una transición, lo importante es establecer nuevas reglas. Lo que varios grupos entendieron fue que la ley se puede negociar si la presión social es enorme.

El cuarto error fue no haber rediseñado instituciones. El gobierno de Vicente Fox se basó en cambiar actitudes y no las formas ni el fondo del viejo régimen. El resultado fue que exaltó los ánimos de varios sectores sociales sin hacer alianzas estructurales: el presidente hizo de su fe religiosa un acto político, que irritó a los partidarios del laicismo, y no comprometió en nada a la iglesia con el Estado o con los demás grupos sociales; se peleó con actores políticos fundamentales (el congreso, el PRI, el sector laico mexicano) sin establecer alianzas estratégicas con otros (el propio partido del presidente, gobernadores, sectores medios, el PRD); dejó intactos varios grupos que claramente están en contra de los cambios, como líderes sindicales, campesinos y de ambulantes. Ante esto, no hubo nuevas instituciones ni tampoco nuevas reglas que sirvieran como punto de referencia para diferenciar “el bien” (el nuevo gobierno

democrático) “del mal” (el régimen revolucionario). Tampoco leyes que pudieran enfrentar las viejas tradiciones.

El corte de caja arroja una situación de luces y sombras. Avances en estabilidad económica, ampliación de cobertura de varios servicios sociales, de eficiencia en el combate a la pobreza extrema, ampliación de libertades. En las tareas pendientes se encuentra aun el desmantelamiento de las viejas estructuras creadas por la revolución así como el rediseño institucional del régimen democrático y, la consecuente, reingeniería constitucional que la sustente. Hay varias propuestas, que van desde la reformulación de la regla de la no reelección hasta la redistribución de funciones entre los poderes del Estado, pasando por cambios organizacionales necesarios.

Los mexicanos hoy son partidarios de un México más democrático. El apoyo abierto de los mexicanos a la democracia liberal ha aumentado de 70 a 80% entre 1995 y 2005 (Moreno, 2006: 66). Además en 20 años (1980-2000), los mexicanos se volvieron más tolerantes, mejores receptores de la globalización, más partidarios de la transparencia, y redujeron su concepción del número de miembros de una familia ideal, es decir son más partidarios de una familia más compacta que las generaciones anteriores (Alducín y Basáñez, 2006: 62). La percepción de los mexicanos sobre las características esenciales de la democracia coincide con valores liberales (igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la importancia de elecciones libres y el ejercicio de los derechos civiles). Mientras más jóvenes los mexicanos son más partidarios de estas ideas (Moreno, 2006: 72).

Ojalá los partidos políticos lean esto con atención. Los problemas del México que viene son enormes. Algunos son: el crecimiento poblacional que apunta al envejecimiento del país, la demanda de bienestar social (hospitales y salud en general), empleo y el fortalecimiento del sistema de pensiones. Algunas proyecciones (como las de Gómez de León, 1999: 77-104) señalan que para el 2010 México tendrá 112 millones de habitantes, 129 en el 2030 y 132.4 en el 2044. Aunque la tasa de crecimiento poblacional irá disminuyendo, seguirá experimentando un crecimiento de habitantes en términos absolutos, que se expresará en que la población en edad de trabajar llegará hasta 87.8 millones en el 2030, cuando alcance su máximo histórico (Gómez de León, 1999: 77-104). Pero ese no será el único problema.

En el 2050 habrá 32.4 millones de personas de edad avanzada, es decir 25% de la población (hoy los países más

envejecidos tienen entre 18 y 22% de personas mayores de 60 años). Para sostener esta pirámide demográfica será necesario formular y consolidar una reforma de seguridad social de pensiones, con el fin de cambiar el panorama tan alarmante de hoy. Apenas 18% de las personas mayores de 60 años tiene una pensión, pero la mayoría de ellas (96%) equivale a un salario mínimo (Gómez de León, 1999: 77-104). Además la desigualdad es un reto enorme.

Hoy, como en 1995 (Martínez, 2006), una décima parte de la población más rica dispone de casi la mitad (48%) de los ingresos totales del país, mientras que la más pobre apenas acumula apenas 7%. Si estos problemas no se enfrentan con inteligencia y estrategia la viabilidad de México podrá estar en problemas. No se diga la democracia. Los partidos políticos deben ponerse a hacer política, no discursos.

Para hacer viable la democracia es indispensable la participación del misionero, del arquitecto y de Robin Hood. Se necesita de los sabios consejos de varios de sus pensadores-militantes-íconos, pues es fundamental la presencia de realismo político, valor y estrategia para formular los cambios. Se necesita que los futuros gobernantes entiendan que en política no debe haber ilusos para que no haya desilusionados, como apuntaba don Manuel Gómez Morín, se necesita que los líderes entiendan que este país prefiere morir de pie que vivir de rodillas, como decía el Che Guevara y que se deben llevar a cabo cambios fundamentales con inteligencia, pues en política la forma es fondo, como señalaba don Jesús Reyes Heróles, uno de los políticos-intelectuales más simbólicos del régimen de la revolución. En este sentido, los políticos tendrán que cambiar hasta su modito de caminar.

Conclusiones

Los tres partidos políticos más importantes han contribuido en formas diversas a la democracia mexicana. La diseminación de valores democráticos, el diseño de institucionalidad y estabilidad, así como la inclusión de políticas sociales en la agenda decisoria han sido fundamentales en la construcción democrática de México. Sin embargo, tanto el PAN como el PRI y el PRD tienen aun enormes pasivos con la sociedad mexicana. Las características confesionales del primero han afectado el laicismo, uno de los valores democráticos del Estado mexicano y no han incluido adecuadamente la justicia social en su agenda decisoria. El segundo ha sido incapaz de

formular una reforma interna que lo democratice, en la medida que su estructura, organización, método y formas fueron diseñadas para gobernar, no para competir por el poder. El tercero tiene fuertes tendencias a la movilización social y un compromiso ambiguo con la democracia. Su respeto por la ley, la tolerancia y las elecciones, así como su madurez política son aspectos poco desarrollados en el PRD.

La viabilidad del futuro democrático de México depende en gran parte de que los partidos políticos mexicanos sean maduros. Dice Rafael Segovia que así como en política el Estado es un mal necesario, los partidos son el mal necesario de la democracia. De esta manera, es fundamental formular los ajustes necesarios para que estos sean funcionales para un país que está a la mitad entre el desarrollo y el subdesarrollo, entre el éxito y el fracaso.

Para enfrentar los enormes retos de este México con potencial y rezagos, los partidos no solo deben acercarse al centro de la geometría política, sino también aprender del adversario. Por ejemplo, los panistas deben analizar el concepto de justicia social (defendido, aunque no bien practicado, por priistas y perredistas), que pasa por enfrentar la desigualdad (diferente al problema de la pobreza). Los perredistas deben desarrollar su habilidad institucional (como los priistas) y su respeto por la ley y el individuo (como sugieren los panistas). Finalmente, los priistas deben fortalecer sus prácticas democráticas (como los panistas) y quizá acercarse más a la gente (como los perredistas).

Sin embargo, hoy la tarea más importante de los partidos políticos mexicanos es la de reformar al Estado, lo que implica una tarea de jardinería más que ingeniería (March y Olsen, en Cabrero, 2005: 77). Es decir, no se trata solo de generar nuevas reglas e instituciones, sino de hacer madurar el nuevo orden legal-institucional. La tarea no es sencilla, sobre todo, en un país que tiende a respetar poco las leyes (incluyendo, por cierto, a los partidos). La nueva estructura institucional debe incluir un sistema semi-presidencial, en donde el poder ejecutivo esté bifurcado (presidente y primer ministro) y el gobierno surja de una mayoría calificada del congreso. Debe incluirse una segunda vuelta electoral y aprobarse la reelección de legisladores, gobernadores y alcaldes definiendo claramente cuántas veces podrán hacerlo. La reducción del tamaño del congreso es indispensable, pues no sólo es obeso sino disfuncional y hasta absurdo. Por ejemplo, el Senado tiene integrantes por representación proporcional, lo cual rompe con el

principio de representación territorial que es su razón de ser. Hay mucho congreso y pocas reformas sustanciales.

Sin duda hay más reformas necesarias. Por el momento las mencionadas son las más visibles en mi perspectiva. La principal aportación que hoy los partidos pueden hacer a la democracia mexicana es darle un adecuado entierro al antiguo régimen (y sus instituciones y reglas) y centrarse en las formas de las reformas del futuro. El trabajo de ingeniería y jardinería deberá incluir las reformas fiscal (fundamental para enfrentar los problemas de desigualdad social), la energética (indispensable para explotar de mejor manera el petróleo que se agota y la electricidad que es insuficiente para el crecimiento económico mínimo en el futuro); la laboral (que premie la productividad y no el corporativismo ni el grado de obediencia de los sindicatos al gobierno).

Como se observa, los partidos políticos deben enfrentar con madurez las múltiples transiciones que vive México: la demográfica (de joven a viejo, y su consecuente cambio de valores); la económica (de secundaria a terciaria; de la preocupación por lo interno a la globalización); la social (que va en diferentes direcciones); la de seguridad (de estabilidad a inquietante); la política (de autoritarismo a democracia); la internacional (de la discreción nacionalista al activismo internacionalista; del silencio y simulación a la defensa de los derechos humanos). Con capacidad estratégica, los partidos deben ofrecer soluciones a los problemas del siglo XXI, que no están necesariamente relacionados con ideologías, por lo menos en principio: terrorismo, medio ambiente, clonación, calentamiento global, narcotráfico, desastres naturales.

A diferencias de otras transiciones que tomaron la vía del pacto (por ejemplo la española, la brasileña, la chilena) o la ruptura (la ex-Yugoslavia), el cambio político en México ha quedado en el limbo. El problema principal se ubica en que no se sustituyó a una persona, sino a un conjunto de reglas y normas formales y no escritas (paquete institucional). Esto ha sido muy complejo. Mientras en otras transiciones la presencia y debilitamiento de un caudillo para bien o para mal ha facilitado la ejecución de los cambios, en México la transición se ha hecho sin rumbo ni objetivos claros. Gran parte del problema se ha debido a la falta de una visión y liderazgo de largo plazo, tanto del presidente de la república como de la clase política mexicana para construir acuerdos.

No se ha sabido qué cambiar ni cómo hacerlo. Tampoco se debilitó al autoritarismo, ni se fortaleció a los actores democráticos.

Se empezó por reformar las políticas públicas, no la política. En este contexto hay al menos tres factores que marcan el estancamiento de la transición en México: la falta de un liderazgo visionario y constructor de largo plazo; la ausencia de definición de una estrategia de transición y rediseño institucional; y la falta de objetivos claros en la redistribución del poder dentro del sistema político.

En términos de la historia política de México es valioso decir que la institución presidencial y el PRI contribuyeron a la larga estabilidad del leviatán construido por la revolución mexicana, mientras el corporativismo y el clientelismo aseguraron el control político de los grupos sociales. La cooptación y el populismo distributivo fueron las principales estrategias. Las dos primeras instituciones fueron la sustancia del régimen, las segundas representaron la esencia, las terceras el método para ejercer el poder. Todo esto constituyó la dictadura perfecta, basada en un sistema político ecléctico, que combinaba elementos autoritarios y democráticos, capitalistas y socialistas, de izquierdas y derechas, liberales y conservadores, de estatismo y de libre mercado.

Aunque las reformas de los decenios de los 80 y 90 fueron exitosas, contribuyeron también al colapso del régimen revolucionario. Como consecuencia, el cambio de gobierno afectó no sólo a las políticas públicas, sino al régimen mismo. El rompimiento del viejo pacto entre Estado y sociedad significó que el patrimonialismo (intercambio de prebendas por apoyo político) que legitimaba al leviatán revolucionario fuera sustituido por un régimen que se justificara por el poder de las elecciones. Los mexicanos, queriendo o no, optaron por evolucionar de súbditos de la revolución a ciudadanos de una democracia incierta. El cambio de gobierno significaba un cambio de régimen también. Se pasaba, al estilo de Tocqueville, del antiguo régimen a la revolución. Del autoritarismo a la democracia.

En esa transición los ciudadanos sustituían a “las fuerzas vivas de la revolución”, el individuo a las corporaciones, la democracia imperfecta a la dictadura perfecta, las formas de la reforma a la reforma del Estado, el debate a la era del silencio, Rousseau a Hobbes. El pacto social se constituía no sólo para tener seguridad, sino para garantizar libertades y derechos individuales. En este camino entre revolución y democracia, entre antiguo régimen y revolución, la construcción de la gobernanza democrática tiene muchos retos, que amenazan la gobernabilidad. Por ello, más que

nunca se necesitan partidos maduros, responsables, sensatos, inteligentes. La pregunta que hoy deben responder los partidos es cuál va a ser su aportación a la sustentabilidad democrática de México. El país espera una respuesta convincente.

El escenario hoy muestra que los arreglos políticos pueden ser posibles si los moderados toman la batuta del juego de la transición. La izquierda debe detener su proceso de desmodernización (Bartra, 2006), que impide llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. La derecha debe fortalecer su ala moderna, centrista, pragmática, tolerante y dejar a un lado su cara dogmática, confesional, furibunda, vulgar para formar gobierno. El PRI debe apostar por ser una oposición confiable, pues esto le traerá votos en el largo plazo y dejar su ambigüedad frente al gobierno, que le hace parecer una oposición semileal (Dresser, 2006). Debe dejar atrás la mezquindad de pensar que le irá bien al PRI si le va mal al país.

Ojalá la *intelligentia* mexicana contribuya a generar ideas que alimenten los acuerdos políticos. Me parece que varios de los intelectuales de izquierda en el reciente proceso electoral (julio de 2007) tuvieron un desempeño poco encomiable. Tomaron partido, en el proceso post-electoral y llegaron a mostrar un comportamiento sutilmente parcial. Ganaron sus preferencias políticas por sobre la templanza. Ganó la pasión a la racionalidad. El luchador social al líder de opinión. El nacionalista al cosmopolita. El desconfiado por sistema al analista de hechos y datos. El ideólogo al intelectual. El comprometido social al reflexivo. Se cautivaron por el *espejismo populista* (Bartra, 2006) de López Obrador, como ayer sucumbieron ante el caudillismo de Marcos. Por cierto, ambos personajes poco cercanos a la tolerancia y la democracia.

Finalmente, la jardinería e ingeniería institucionales exigen precisión y visión. Se necesita planear en lugar de improvisar, transitar en lugar de transar a la democracia, promover la eficiencia en lugar de la suficiencia, entender que la igualdad pasa por la diferencia y no por la uniformidad como lo pensó la revolución mexicana y las revoluciones del siglo XX, que la crítica es sustancia, no sentencia, que moral no es un árbol que da moras, que democracia no es moda, sino modo de vida. Se necesita cambiar las formas para cambiar el fondo. Sustituir la protesta por la propuesta. Se necesita que los partidos sigan los consejos de don Jesús Reyes Heróles, quien señalaba que para hacer política había que tener la cabeza fría, el corazón caliente y lo demás bien puesto. México se los agradecerá.

BIBLIOGRAFÍA

- Alducín, E. y M. Basáñez, (2006). “Los valores de los mexicanos”, *Este País*, 181: 62-5.
- Basáñez, M. (2006). “País heterogéneo”, *Letras Libres*, septiembre, <www.letraslibres.com/index.php?art=11484>.
- Bartra, R. (2005). “La responsable moral de la democracia”, *Nexos*, 336, <www.nexos.com.mx>
- (2006). “Fango sobre la democracia”, *Letras Libres*, septiembre, <www.letraslibres.com/index.php?art=11484>.
- Bentham J. (1960). *Fragment on government*. (Editado por W. Harrison). Oxford: Blackwell.
- Brandenburg, F. (1964). *The Making of Modern Mexico*, Englewood cliffs: Prentice Hall.
- Cabrero, E. (2005). *Acción pública y desarrollo local*. México: FCE
- Cansino, C. (2005). “Transición democrática y reforma del Estado en México”, en Aziz, A. *Economía y Política (III)*, México: Cámara de Diputados/CIESAS/Porrúa, 377-89.
- Carpizo, J. (1978). *El Presidencialismo Mexicano*. México: siglo XXI.
- Castañeda, J. (2005). ‘PRI: Dr. Jekyll y el Sr. Hyde’, *Reforma*, <www.ideasdelcambio.org>
- Cordera, R. y E. González (1999). “La sociedad mexicana hacia el nuevo milenio: cohesión y divergencia”, en Millán J. y A. Concheiro, 281-330.
- Cosío Villegas, D. 1975a. *El sistema político mexicano*. México: Joaquín Mortiz.
- , (1975b). *La sucesión presidencial*. México: Joaquín Mortiz.
- Espinosa, P. (2002). “Pacto priísta” refuerza a Fox’, en Internet: <<http://semioticapolitica.com/articulo111.htm>>
- El Universal*, (2006). “Lidera México en crecimiento en AL: Banco Mundial”, (22 de abril), <www.eluniversal.com.mx/notas/344591.html>

- , (2006). “El trío casi dinámico”, (9 de julio), <www.eluniversal.com.mx/notas/>
- , (2006). “Refuta Cuauhtémoc Cárdenas críticas de Poniatwoska”, (14 de septiembre), El Internet: <www.eluniversal.com.mx/notas/375152.html>
- Gómez, H. (2005). “La contribución a la democracia”, *Nexos*, 336, <www.nexos.com.mx>
- Gómez de León, J. (1999). “Retos y oportunidades demográficas del futuro de la población”, en Millán J. y A. Colcheiro, 77-104.
- González L. (2005). “Tres definiciones”, *Nexos*, 336, <www.nexos.com.mx>
- González Casanova, P. (1981). *El Estado y los partidos políticos en México*, México: Era.
- , (1970). *La democracia en México*, México: Era.
- Grindle, M. S. (1977). *Bureaucrats, Politicians, and Peasants in Mexico: A Case Study in Public Policy*, Berkeley: University of California Press, 26-110, 164-84.
- Guillén, A. (1989). “El Partido Acción Nacional”, en Araujo, O. *La reforma política y los partidos en México*. México: siglo XXI, 125-41.
- Hamilton, N (1982) *The Limits of state autonomy: post-revolutionary Mexico*, Princeton: PUP, 15-23.
- Held, D. (1996). *Modelos de democracia*, Madrid: Alianza Universidad.
- Hobbes, T. (1999). *Leviatán: la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil*. Madrid: Alianza.
- INEGI, (1995). *X Censo de población y vivienda 1995*, México: INEGI.
- Krauze, E. (2006). “Refrendar la democracia”, *Letras Libres*, <www.letraslibres.com>
- Loaeza, S. (1999). *El partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta*. México: FCE
- (2006). “Las elecciones presidenciales: entre lo probable y lo posible”, *Este País*, 181: 106-8.
- Locke, J. (2000). *Ensayos sobre el gobierno civil*. México: Gernika.
- Madison, J. (1966). *The federalist papers*. Nueva York: Doubleday.

- Malloy, J. M. (ed). (1977). *Authoritarianism and corporatism in Latin America*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Martínez, F. (2006). “Creciente tensión social ante la desigualdad distribución de riqueza”, *La Jornada*, <www.jornada.unam.mx/2006/09/10>
- Maquiavelo, N. (1991). *El Príncipe*. México: Porrúa.
- Mercado P. y C. Martínez (2005). “Historias de amor y odio”, *Nexos*, 336, <www.nexos.com.mx>
- Mill, J. S. (1997). *Sobre la libertad*. México: Alianza
- Mill, J. (1970). “Considerations on representative government”, en H. B. Acton (ed.), *Utilitarianism, liberty and representative government*. Londres: Dent and Sons.
- Millán, J. y A. Concheiro (1999). *México 2030. Nuevo siglo, nuevo país*. México: FCE.
- Moreno, A. (2006). “Concepto y valoración de la democracia: hallazgos de la Encuesta Mundial de Valores 2005 en México” *Este País*, 181: 66-75.
- Moreno, R. (2006). “Acción Nacional: ¿hacia un moderno partido de cuadros?”, *Este País*, 179: 36-41.
- Montesquieu, Ch (2000). *El espíritu de las leyes*. México: OUP
- OECD, (2002). *OCED Economic Surveys: Mexico 2002*. Paris: OCED.
- Pastor M. Jr., y Wise C. (1998). ‘Mexican-style neoliberalism, state policy and distributional stress’, in C. Wise (ed.), *The Post-Nafta Political Economy and the Western Hemisphere*, University Park: The Pensilvanya State University press, 41-81.
- Peschard, J. (2006). “Quince años de cambios en la política mexicana”, *Este País*, 181: 31-5.
- Purcell, J. F. y S. K. Purcell (1977). ‘Mexican business and public policy’ in J. Malloy, 191-226.
- Reyes, A. (2006). “Democracia y principios, en el balance”, *La Nación*, < www.pan.org.mx>.
- Reyes Heróles, F. (2006). “Estrategia de colisión y ruptura”, *Diario de Yucatán*, <www.yucatán.com.mx>.
- Rossseau, J. (2005). *Contrato social*. Barcelona: Planeta dragostine.

- , (1999), “México 2030: las señales de la vida política”, en Millán J. y A. Concheiro, 257-280.
- Semo, E. (2005). “Cuatro décadas de política”, *Nexos*, 336, <www.nexos.com.mx>
- Silva, J. (2006). “La coronación de los Leones”, *Diario de Yucatán*, <www.yucatán.com.mx>
- Silva-Herzog Márquez, J. (2006). “Pronto será el tiempo del PRD”, *Diario de Yucatán*, <www.yucatán.com.mx>
- Tocqueville, A. (1985). *La democracia en América*. Madrid: Alianza editorial.
- Weber, M. (1978). *Economía y sociedad*. México: FCE, 941-1005.
- Wikipedia, *México*. <<http://es.wikipedia.org/wiki/Portada>>

Números anteriores de
Documentos de trabajo
Política y Gestión

<http://e-archivo.uc3m.es/dspace/handle/10016/587>

1/2004

Philippe C. Schmitter

On Democracy in Europe and the Democratization of Europe

2/2004

Antonio Natera

La noción de Gobernanza como gestión pública participativa y reticular

3/2005

Ruth Martínón

Las ideas en las políticas públicas: el enfoque de las coaliciones promotoras

4/2005

Francisco J. Vanaclocha, Ruth Martínón, Roberto Losada

Traumatic renewal of values and value criteria in crisis management

5/2005

Manuel Alcántara Sáez

Las cumbres iberoamericanas en perspectiva española.

6/2006

Tatyana Dronzina

El nuevo terrorismo global y sus implicaciones para los Balcanes

7/2006

Ester García Sánchez

Un concepto de actor para la Ciencia Política

8/2006

Remo Fernández Carro y Víctor Lapuente Giné

A pied-piper situation: do bureaucratic researchers produce more science?